



www.world-psi.org

La situación en las Américas: una visión sindical

IAMREC 2016

San Juan, Puerto Rico – 31 marzo 2016

La democracia está amenazada en la mayoría de los países de América. Este ataque ocurre especialmente donde los gobiernos progresistas revertieron, en mayor o menor grado, las políticas neoliberales, a través de medidas que promovieron mayor presencia del Estado en la economía, el aumento de la distribución de renta para los trabajadores y la ejecución de políticas públicas y sociales. La actual mudanza en la coyuntura política, que coincide con una menor demanda internacional de las materias primas latinoamericanas y un consecuente impacto en sus economías, ha generado incertezas sobre el futuro socioeconómico de la región y ha puesto en riesgo la propia vida democrática de las naciones.

Dicho combate a las medidas progresistas se siente en la actualidad, en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y particularmente en Brasil, país que vive una situación alarmante, con una posibilidad real de ejecución de un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff a través de un proceso de destitución basado en argumentos absolutamente cuestionables y rechazados por la mayoría del mundo sindical, social e intelectual.

Mirando más al Norte, para los Estados Unidos, la ascensión del magnate Donald Trump nos muestra el peor aspecto de la onda conservadora en la región, con un fuerte discurso que no solo discrimina las minorías como también amenaza las relaciones internacionales de su país. Estamos preocupados con el impacto en el área de educación en todo el mundo, ante la actuación de corporaciones como Pearson, cuyo negocio prospera con base en la formulación de testes para escuelas privadas.

Por otro lado, en Canadá, el nuevo primer ministro, Justin Trudeau, de manera inédita, compuso su gabinete con equidad de género; sin embargo, su gobierno aún no revertió los ataques normativos ilegales del gobierno anterior en relación a la negociación colectiva y el derecho de huelga de los trabajadores públicos federales.

En Honduras, el reciente asesinato de Berta Cáceres, militante por los derechos de los pueblos originarios, está claramente identificado con la violencia promovida en ese país por los intereses de las empresas transnacionales del sector de minería. De la misma forma, en Caribe, el poder de las corporaciones promueve en Trinidad y Tobago la dimisión de 600 trabajadores, lo que podría afectar más de 20 mil personas con el mero cierre de ArcelorMittal, empresa de acero que alega dificultades económicas y que

ofreció vender su deuda de más de un millón de dólares al gobierno de Trinidad y Tobago.

Es sabido que por detrás de la embestida contra la democracia en Brasil y en los demás países está el gran poder representado por las corporaciones que, a través de su vinculación y/o propiedad con los consorcios y oligopolios de comunicación, quieren legitimar el modelo económico neoliberal, por un lado, manipulando la información que entregan a la opinión pública en favor de sus intereses y, por otro lado, financiando millonarias campañas electorales para asegurar que la mayoría en los parlamentos adopte su agenda en nivel nacional. A eso se suma el hecho de que esas empresas también controlan parte del Poder Judicial que, para decir lo mínimo, es susceptible a las ideas neoliberales.

Además, la corrupción es uno de los elementos centrales del poder de las corporaciones. Sin embargo, las corporaciones, otra vez con la ayuda de los medios de comunicación, presentan la corrupción como un tema moralista y no aceptan la adopción de medidas que tengan el objetivo de combatir la corrupción, como el fin del financiamiento privado de campañas y el cobro efectivo de impuestos, incluso para que las corporaciones mismas paguen lo justo.

Infelizmente, esa realidad es común en muchos países del mundo. La actuación cada vez más influyente de las corporaciones en el interior de los Estados convierte en rehenes todos los gobiernos, y resulta que los gobiernos que no se rinden son atacados, y ese ataque incluye los sindicatos del sector público, que muchas veces tienen negado su derecho a la negociación colectiva y sufren los impactos de los procesos de privatización, de la implantación de Tratados de Libre Comercio (TLCs) y de la evasión de impuestos.

Por fin, queremos resaltar que esa compleja crisis, que afecta la humanidad en su conjunto y la región de Américas en particular, no debe servir de disculpa para nos desobligarnos de lidiar con ella y, sobretudo, de presentar propuestas de acción para enfrentar de manera conjunta las graves amenazas descritas previamente. Es un hecho que para las grandes mayorías trabajadoras, el camino para anular esas amenazas pasa necesariamente por crear aceleradamente las condiciones para generar grandes movilizaciones sociales unitarias, que permitan defender nuestras incipientes democracias y los gobiernos de corte progresista, obstruyendo los planes sediciosos de los consorcios transnacionales que pretenden substituir la política y la democracia por una forma de llegar al gobierno por medio de operaciones con los medios de comunicación y los poderes judiciales.

Por eso, reafirmamos nuestra lucha por:

- Defender el sistema democrático en todos sus aspectos, como la defensa de los derechos de la mayoría de la población y los derechos sindicales;
- Defender los sindicatos de los servicios públicos, la negociación colectiva y el derecho a huelga;

- Defender las conquistas sociales en la región, cómo las medidas que combaten la pobreza y buscan una mejor distribución de renta;
- Luchar por la justicia fiscal, para que las empresas transnacionales paguen los impuestos sobre sus lucros; y promover un sistema de impuestos progresivos. Luchando, también, contra los “paraísos fiscales”;
- Luchar contra los tratados de libre comercio cómo TISA, TPP, CETA y TTIP, que sólo hacen crecer el poder de las corporaciones;
- Combatir las políticas de privatización y precarización del empleo, temas que favorecen aún más las empresas y su brutal concentración de renta;
- Combatir la corrupción en sus orígenes, cómo los monopolios de los medios de comunicación, el financiamiento privado de elecciones de parlamentares y gobernantes, y modalidades de elisión de impuestos por parte de las corporaciones;
- Repudiar las nuevas leyes que bajo el lema de “combate al terrorismo”, en verdad, buscan criminalizar la protesta social, el derecho a huelga y las luchas del movimiento sindical;
- Repudiar los ataques a los gobiernos elegidos democráticamente, cómo lo de Brasil, y denunciar el hecho internacionalmente, cómo un atentado a la democracia y una acción para favorecer los intereses de las empresas transnacionales y sus aliados locales.